

Artículo 125

das funciones y atribuciones; el 115 y hasta el 122 son los referentes a la forma de gobierno de los estados, organización de los municipios, funciones, facultades y obligaciones correspondientes, así como prohibiciones respectivas; el 131 que otorga facultad privativa a la Federación para gravar el comercio de la importación y exportación de mercaderías y concede la delegación de facultades extraordinarias del Legislativo al Ejecutivo para legislar sobre el particular, y el 132 relativo a la potestad jurisdiccional de los poderes federales sobre los bienes inmuebles destinados por el gobierno de la Unión al servicio público o de uso común, como son fortalezas, cuarteles, almacenes de depósito, etcétera.

BIBLIOGRAFÍA: Congreso de la Unión, *Los derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones*, 2ª ed., México, Librería de Manuel Porrúa, 1978, t. VIII, pp. 797-810; Lanz Duret, Miguel, *Derecho constitucional mexicano*, 5ª ed., México, Norgis, 1959, pp. 1-5 y 29-41; Ortiz Ramírez, Serafin, *Derecho constitucional mexicano*, México, Cultura, 1961, pp. 276-294; Tena Ramírez, Felipe, *Derecho constitucional mexicano*, 12ª ed., México, Porrúa, 1973, pp. 109-134; Tena Ramírez, Felipe, *Leyes fundamentales de México 1808-1964*, 2ª ed., México, Porrúa, 1964.

Francisco Arturo SCHROEDER CORDERO

ARTÍCULO 125. Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la Federación y otro de un Estado que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos, el que quiera desempeñar.

COMENTARIO: La disposición contenida en el artículo 125 de nuestra Constitución vigente establece la prohibición a diputados y senadores, durante el periodo de su encargo, para ocupar dos cargos de elección popular, o uno de la Federación y otro de un estado que también sea de elección.

Este precepto, conjuntamente con la norma establecida en el artículo 62 de la Constitución, consigna las llamadas incompatibilidades parlamentarias.

Las incompatibilidades de diputados y senadores son el conjunto de cargos que no se pueden ostentar durante el ejercicio del mandato representativo. La idea fundamental de estas prohibiciones es la independencia de los legisladores en relación a otros poderes del Estado, especialmente el Ejecutivo, y a concretas fuerzas políticas y so-

ciales, como forma de asegurar el correcto ejercicio de las importantes funciones propias de su cargo.

El artículo 125 tiene su antecedente inmediato en el 118 de la Constitución de 1857; a partir de él, el vigente amplió la prohibición a los cargos de elección popular de los estados. Ciertamente la Constitución de 1917 extendió la cobertura y alcance de las incompatibilidades; sin embargo, hoy por hoy, los grupos de presión y de interés también intentan influir en las decisiones de los legisladores y, por lo mismo, disminuir la independencia que debe caracterizar su actividad; razón por la cual creo que las incompatibilidades deberían abarcar, además de los cargos de elección popular, el desempeño de actividades privadas como la gestión, defensa o asesoramiento de administradores públicos, la actividad de contratista o fiador de obras y servicios públicos y, en general, de todas aquellas ocupaciones que se opongan a la función propia del legislador en lo particular y a los fines del Estado en lo general.

El último párrafo del artículo establece el derecho de opción que tiene el diputado o senador para decidir el puesto que quiera ejercer. En este orden de ideas y de acuerdo con la redacción del precepto, que consigna que el nombrado puede elegir entre ambos puestos, el que quiera desempeñar, se desprende que las incompatibilidades comienzan a ser observables desde que se instala la cámara o toma posesión el legislador y durante todo el tiempo que dure su mandato. En efecto, tal como está redactado el artículo permite suponer que la incompatibilidad no se da desde el momento en que un diputado o senador sea designado candidato, ya que no existe certeza alguna de que vaya a resultar triunfador en los comicios. En otras palabras, una causa de incompatibilidad presente en el momento de las elecciones, es decir que sea en ese momento diputado y sea a la vez candidato a senador, no afecta para nada su validez, pero en cambio es de aplicación durante todo el tiempo que se ostente el cargo de diputado o senador. O sea, que una vez obtenido el triunfo para senador, no podrá desempeñar los dos cargos simultáneamente.

En otro orden de ideas, cabe comentar que se llega a confundir el concepto de inelegibilidad con el de incompatibilidad; de esta manera, Lanz Duret sostiene que son incompatibilidades las consignadas en las fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo 55. Desde mi perspectiva, el ilustre constitucionalista campechano cometió un error de apreciación. En efecto, ambas instituciones tratan de asegurar la independencia de los diputados y senadores; pero las primeras persiguen además, eliminar ciertas situaciones privilegiadas que podrían producir ventajas o discriminaciones en el proceso electoral. En este sentido y a diferencia de las incompatibilidades, las causas de inelegibi-

lidad son aplicables desde que comienza y hasta que termina este proceso electoral, la no observancia de estas disposiciones produce la nulidad de la elección, en algunos casos incluso como causa superviniente.

La Constitución mexicana no contempla la existencia de ningún órgano especializado ante el cual se haga valer las causas de incompatibilidad, que generalmente son las mismas cámaras a la que pertenece el presunto legislador transgresor. Tampoco aparece dicha disposición ni en la Ley Orgánica del Congreso General ni en su reglamento interior; sin embargo, creo que dicha omisión es irrelevante ya que en caso de que se presentara una situación de esa naturaleza, la propia cámara a través de una comisión especial podría sustanciar y resolver el problema. De cualquier forma sería conveniente que en cada cámara se integrara una comisión de incompatibilidades.

Por otro lado, la norma tampoco establece ninguna sanción a quien viole el supuesto de la misma, circunstancia que sí se da en el caso de las incompatibilidades consignadas en el artículo 62. En este sentido, sería recomendable una adición que estableciera que la aceptación por un diputado o senador de cualquier cargo declarado incompatible llevará consigo la simultánea renuncia al correspondiente cargo.

BIBLIOGRAFÍA: Congreso de la Unión, *Los derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones*, 2ª ed., México, Librería de Manuel Porrúa, 1978, pp. 813 y ss.; Lanz Duret, Miguel, *Derecho constitucional mexicano*, 5ª ed., México, CECSA, 1959, pp. 130-131; Rodríguez Lozano, Amador, "Incompatibilidades y licencias parlamentarias", *Anuario Jurídico*, México, IX, 1982, pp. 643 y ss.; Santaella López, Fernando, *Derecho parlamentario español*, Madrid, Editora Nacional, 1984, pp. 77 y ss.

Amador RODRÍGUEZ LOZANO

ARTÍCULO 126. No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por la ley posterior.

COMENTARIO: Los antecedentes de este artículo se remontan a la Constitución de Cádiz de 1812; siendo el más directo el artículo 118 de la Constitución de 1857. El texto actual es el mismo que se aprobó en la sesión ordinaria del 25 de enero de 1917, sin discusión, y por unanimidad de 154 votos.

Este artículo 126 contiene sin duda una disposición que garantiza el manejo y ejercicio correcto

y objetivo del gasto público en el orden federal. Estrechamente relacionado con el gasto público, está el presupuesto anual de egresos, cuya discusión y aprobación corresponde a la Cámara de Diputados en términos del artículo 74, fracción IV, constitucional, como una facultad exclusiva.

Aunque sobre el presupuesto, sus orígenes y finalidades existen múltiples opiniones, según el punto de vista desde el que sea analizado, lo cierto es que la idea del presupuesto surgió como una medida de solución para limitar el poder del rey por parte del Parlamento, al lograrse que éste aprobara previamente los gastos que el rey debía realizar. Con el transcurso del tiempo el presupuesto ha llegado a ser una herramienta de trabajo en los tres niveles del gobierno mexicano, precisamente para lograr no sólo el control, sino racionalidad y eficiencia en el gasto público; objetivos éstos cuya consecución refleja la correcta ejecución del presupuesto.

El presupuesto, como documento, contiene una relación de conceptos y cantidades que se estima erogar en un ejercicio fiscal, la cual constituye lo que se conoce como gasto público. Así, contiene un apartado para cada uno de los tres poderes de la Unión, otro para los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, otro más para la deuda pública, y otro para desarrollo regional y participaciones a estados y municipios. Además, señala los medios de control para el ejercicio del presupuesto, condicionando la ministración de fondos a la autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto, que es, por otro lado, la encargada de aprobar los calendarios de pagos de las dependencias y entidades señaladas en el presupuesto. Éste, a su vez, establece las medidas para el ejercicio del gasto de inversiones públicas; así como los criterios que deberán observarse en las erogaciones por concepto de subsidios, y por último, en el propio documento se faculta al Ejecutivo federal para efectuar los trasposos y transferencias que resulten procedentes, respecto a las dependencias y ramos correspondientes, como consecuencia de las adecuaciones a la organización y funcionamiento de la administración pública federal centralizada que apruebe el Congreso de la Unión; agregándose que del ejercicio de esta facultad el Ejecutivo federal informará al rendir la cuenta anual de la hacienda pública federal.

Es importante destacar que en el presupuesto de egresos de 1985, expresamente se estableció una previsión que sólo se podrá ejercer para atender efectos de los incrementos de las tasas de interés en los mercados financieros internacionales y otras contingencias. Se agregó que el ejercicio de dicha previsión estará sujeto a la disponibilidad de recursos financieros no inflacionarios. La Secretaría de Programación y Presupuesto debe informar trimestralmente del manejo que haga de dicha